

ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO, POR EL QUE DA CUMPLIMIENTO A LA RESOLUCIÓN IDENTIFICADA CON LA CLAVE DE EXPEDIENTE TEEP-A-008/2010 Y SU ACUMULADO TEEP-A-009/2010 EMITIDA POR EL TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO

ANTECEDENTES

I.- En sesión ordinaria de fecha diez de noviembre del año dos mil nueve, el Consejo General del Instituto Electoral del Estado aprobó mediante el acuerdo número CG/AC-025/09 el Reglamento para la Tramitación de Denuncias del Instituto Electoral del Estado.

II.- En sesión ordinaria de fecha catorce de diciembre del año dos mil nueve, el Consejo General del Instituto Electoral del Estado aprobó mediante el acuerdo número CG/AC-040/09 diversas reformas al Reglamento para la Tramitación de Denuncias del Instituto Electoral del Estado.

III.- El Consejo General de este Instituto aprobó en sesión especial de fecha veinticuatro de febrero del presente año reformas al Reglamento para la Tramitación de Denuncias del Instituto Electoral del Estado, en cumplimiento a lo ordenado por el Tribunal Electoral del Estado en la resolución emitida dentro de expediente número TEEP-A-005/2009.

IV.- Inconforme con lo anterior, el representante propietario de Convergencia acreditado ante el Consejo General de este Instituto, Licenciado Jorge Luis Blancarte Morales, en fecha veintisiete de febrero de dos mil diez presentó ante la Oficialía de Partes de este Organismo Electoral su respectivo medio de impugnación, en contra de *“...los actos del Consejo General del Instituto Electoral del Estado, contenidos en el acuerdo identificado con el número CG/AC-030/10 aprobado en sesión especial de fecha veinticuatro de febrero de dos mil diez...”*.

En la misma fecha, el representante propietario del Partido Acción Nacional acreditado ante el Consejo General de este Instituto, Licenciado Rafael Guzmán Hernández, presentó ante la Oficialía de Partes de este Organismo Electoral su respectivo medio de impugnación, en contra de *“...acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral del Estado, por el que da cumplimiento a la resolución*

identificada con la clave de expediente TEEP-A-05/2009 emitida por el Tribunal Electoral del Estado...”.

V.- En sesión pública de fecha veintinueve de marzo de dos mil diez, el Tribunal Electoral del Estado emitió resolución dentro del expediente identificado con el número TEEP-A-008/2010 y su acumulado TEEP-A-009/2010.

En el mencionado fallo, el Tribunal Electoral del Estado resolvió lo siguiente:

“PRIMERO.- Es procedente la acumulación del expediente TEEP-A-009/2010 al diverso TEEP-A-008/2010, por éste (sic) el más antiguo.

SEGUNDO.- Se declara **FUNDADO** el agravio esgrimido por los representantes propietarios de los Partidos Políticos Convergencia y Acción Nacional, acreditados ante el Consejo General del Instituto Electoral del Estado, en términos de lo establecido en el considerando **CUARTO**, rector de esta sentencia.

TERCERO.- En consecuencia, se ordena al Consejo General del Instituto Electoral del Estado, que dentro del término de **setenta y dos horas** contadas a partir de que le sea notificada la presente sentencia, dé cumplimiento a la misma en los términos del considerando **CUARTO**, en el entendido de que deberá informar a este Tribunal dentro del término de **veinticuatro horas** siguientes a que se realice el mismo.”

En la misma fecha, el actuario del mencionado Órgano Jurisdiccional, Licenciado César Huerta Méndez, remitió a este Organismo Electoral la resolución recaída al expediente antes señalado mediante oficio número TEEP-PRE-057/2010, siendo notificado dicho oficio al Consejero Presidente del Consejo General el mismo día a las diecisiete horas con cincuenta y tres minutos.

C O N S I D E R A N D O

1.- Que, en términos de lo establecido en los artículos 3 fracción II de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla y 71 del Código de Instituciones y Procesos Electorales del Estado de Puebla, el Instituto Electoral del Estado es un organismo público de carácter permanente, autónomo e independiente, con personalidad jurídica y patrimonio propios, encargado de la función estatal de organizar las elecciones.

En el ejercicio de dicha función deben de observarse los principios rectores de legalidad, imparcialidad, objetividad, certeza e independencia, atendiendo a lo indicado en el artículo 8 del Código de Instituciones y Procesos Electorales del Estado de Puebla.

2.- Que, el artículo 79 del Código Comicial del Estado señala que el Consejo General será el Órgano Superior de Dirección del Instituto y el responsable de vigilar el cumplimiento de las disposiciones constitucionales y legales en materia electoral, así como de vigilar que los principios rectores de la función electoral guíen todas las actividades del Instituto.

3.- Que, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 3 fracción IV de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla y el diverso 325 del Código de Instituciones y Procesos Electorales del Estado de Puebla el Tribunal Electoral del Estado, como máxima autoridad jurisdiccional en materia electoral del Estado, es el organismo de control constitucional local, autónomo e independiente, de carácter permanente, encargado de garantizar que los actos y resoluciones electorales se sujeten invariablemente a los principios de constitucionalidad, legalidad y definitividad, rectores en los procesos electorales.

Por lo tanto, este Órgano Superior de Dirección en estricto acatamiento a lo ordenado por el Tribunal Electoral del Estado en la resolución identificada con la clave de expediente TEEP-A-008/2010 y su acumulado TEEP-A-009/2010 observando además de manera irrestricta los principios rectores de la función estatal de organizar las elecciones, mismos que han quedado debidamente establecidos en el artículo 8 del Código en comento; y en ejercicio de la atribución conferida en el numeral 89 fracción II del citado Cuerpo Legal concerniente a vigilar el cumplimiento de las disposiciones constitucionales relativas y las contenidas en el mencionado Código procederá a cumplir en el presente considerando con lo ordenado en la mencionada resolución.

Así, el Órgano Jurisdiccional en cita en su parte considerativa y resolutive determinó lo siguiente:

“...

Finalmente, es preciso establecer que el hecho de que se inicie una investigación oficiosa por parte de la autoridad electoral administrativa, no significa que la misma resulte constitutiva de una infracción o que genere una sanción para el ente investigado, ya que si los hechos no son claros, precisos, ni se determinan las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se verificaron, la misma no sería apta para continuar el ejercicio de tal atribución. Esto es así ya que la función punitiva de los órganos administrativos electorales estatales, debe tener un respaldo legalmente suficiente; no obstante las amplias

facultades que se les otorga a tales órganos para conocer, investigar, acusar y sancionar ilícitos.

Por lo apuntado con anterioridad se declara **FUNDADO** el agravio esgrimido por los recurrentes en este considerando analizado, consecuentemente, se ordena al Consejo General del Instituto Electoral del Estado, que en el término de **setenta y dos horas** contadas a partir de que le sea notificada la presente sentencia, realice al Reglamento para la Tramitación de Denuncias del Instituto Electoral del Estado, las modificaciones que correspondan a efecto de establecer que dicho Órgano Colegiado, tenga la facultad de instaurar oficiosamente la investigación de hechos que puedan resultar conculcatorios de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, y normatividad electoral que de ella emana; hecho lo anterior, lo deberá informar dentro del término de **veinticuatro horas**, a este Tribunal Electoral del Estado de Puebla.

...

PRIMERO.- Es procedente la **acumulación** del expediente **TEEP-A-009/2010** al diverso **TEEP-A-008/2010**, por éste (sic) el más antiguo.

SEGUNDO.- Se declara **FUNDADO** el agravio esgrimido por los representantes propietarios de los Partidos Políticos Convergencia y Acción Nacional, acreditados ante el Consejo General del Instituto Electoral del Estado, en términos de lo establecido en el considerando **CUARTO**, rector de esta sentencia.

TERCERO.- En consecuencia, se ordena al Consejo General del Instituto Electoral del Estado, que dentro del término de **setenta y dos horas** contadas a partir de que le sea notificada la presente sentencia, dé cumplimiento a la misma en los términos del considerando **CUARTO**, en el entendido de que deberá informar a este Tribunal dentro del término de **veinticuatro horas** siguientes a que se realice el mismo.

..."

Atendiendo a lo ordenado por el Tribunal Electoral del Estado, la Comisión de Vigilancia y Trámite de Denuncias y la Secretaría General elaboraron la propuesta de reforma del citado Ordenamiento Legal, que contempla en términos de lo ordenado por el Órgano Jurisdiccional el inicio de los procedimientos no sólo a petición de parte sino de oficio.

Así, en atención a que la investigación de cualquier hecho relacionado con la materia electoral por parte del Consejo General, no solo puede originarse con la presentación de una queja o denuncia, sino que debe incoarse cuando algún Órgano o integrante del Consejo General en ejercicio de sus atribuciones, informe de la presunta violación a las disposiciones del Código o normas reglamentarias y lo haga de su conocimiento, es por lo que resulta de suma

importancia crear un procedimiento administrativo a través del cual se pueda dar trámite de oficio.

Aunado a lo anterior, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha sustentado que la facultad de iniciar un procedimiento administrativo de investigación sobre irregularidades o faltas administrativas, que eventualmente culminaría con la aplicación de una sanción, no necesariamente parte del supuesto de que se haya presentado una queja o denuncia de un partido político por escrito pues también puede ejercerse dicha facultad cuando un órgano del Instituto Federal Electoral lo informe, en virtud de haber tenido conocimiento, con motivo del ejercicio de sus atribuciones constitucional y legalmente conferidas de que se han violado disposiciones del Código de la materia, tal como se señala en tesis de Jurisprudencia cuyo rubro y texto a la letra señalan:

“PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR GENÉRICO EN MATERIA ELECTORAL. LA INVESTIGACIÓN DEBE INICIARSE CUANDO UN ÓRGANO DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL TIENE CONOCIMIENTO DE ALGUNA VIOLACIÓN.—La facultad de iniciar un procedimiento administrativo de investigación sobre irregularidades o faltas administrativas, que eventualmente culminaría con la aplicación de una sanción, no necesariamente parte del supuesto de que se haya presentado una queja o denuncia de un partido político por escrito, pues también corresponde a la Junta General Ejecutiva ejercer dicha facultad cuando un órgano del Instituto Federal Electoral se lo informe, en virtud de haber tenido conocimiento, con motivo del ejercicio de sus atribuciones constitucional y legalmente conferidas, de que se ha violado una disposición del código, en relación con el sistema sancionador en materia electoral y con respecto al contenido del párrafo 2, del artículo 270, en relación con los diversos preceptos 82, párrafo 1, inciso h), y 86, párrafo 1, inciso l), del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. En efecto, cualquier órgano del propio Instituto Federal Electoral tiene no sólo la posibilidad, sino la obligación de hacer del conocimiento de las instancias competentes cualquier circunstancia que pueda constituir un acto de los sancionados por la legislación electoral, ya que el artículo 41, fracción III, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el artículo 73 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, disponen que en el ejercicio de su función estatal, el Instituto Federal Electoral tiene como principios rectores la certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad, razón por la cual ninguno de los órganos que integran dicha institución, al ejercer las atribuciones que se prevén a su cargo en la ley, podría ignorar o dejar pasar una situación que constituyera una irregularidad en la materia y, en consecuencia, ser omiso en hacer del conocimiento de la Junta General Ejecutiva dicha circunstancia sino, por el contrario, tiene la obligación de informarlo, porque de no hacerlo incurriría en responsabilidad.

Tercera Época:

Recurso de apelación. SUP-RAP-020/98.—Partido Revolucionario Institucional.—17 de noviembre de 1998.—Unanimidad de votos.

Recurso de apelación. SUP-RAP-009/99.—Cruzada Democrática Nacional, agrupación política nacional.—19 de mayo de 1999.—Unanimidad de votos.
Recurso de apelación. SUP-RAP-104/2003.—Partido de la Revolución Democrática.—19 de diciembre de 2003.—Unanimidad de votos.
Sala Superior, tesis S3ELJ 17/2004.
Compilación Oficial de Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005, páginas 245-246.”

En ese contexto, la aludida propuesta precisa las atribuciones de la Comisión de Vigilancia y Trámite de Denuncias y de la Secretaría General en el tema; estableciéndose que el procedimiento para iniciar de oficio la investigación de hechos consistirá en que el órgano o integrante del Consejo que en ejercicio de sus atribuciones, informe de la presunta violación a las disposiciones del Código o sus normas reglamentarias, lo comunicará de inmediato al Consejero Presidente. A su vez, el Consejero Presidente hará del conocimiento de inmediato a la Comisión en comento quien acordará el inicio de la investigación e instruirá al Secretario para que realice las diligencias necesarias para recabar información materia de la misma, debiendo éste último rendir un informe respecto a la misma, fundando y motivando la procedencia o improcedencia de la continuación del procedimiento de oficio.

Una vez recibido dicho informe, la Comisión referida dentro de los tres días siguientes acordará la continuación de la investigación o improcedencia de la misma; si se acuerda la continuación del procedimiento de oficio se aplicará en lo conducente las disposiciones contempladas en el procedimiento ordinario; y si se acuerda la improcedencia se desechará de plano, observando para ello lo dispuesto en el Reglamento aplicable.

Asimismo, dentro de las reformas en comento se prevé la forma en la cual los Órganos Transitorios harán del conocimiento los hechos que durante el ejercicio de sus atribuciones consideren violatorios de las disposiciones en la materia.

Cabe precisar que se indica que los procedimientos relacionados con la difusión de propaganda que calumnie o denigre a los partidos políticos o coaliciones y sus candidatos o a las instituciones sólo podrán iniciar a petición de parte, esto en atención a que solamente la parte agraviada es quien puede referir de manera precisa los hechos que estime constituyen una violación en su contra.

Sirve de sustento a lo anterior, el criterio emitido por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la sentencia identificada con el número de expediente SG-RAP-57/2009 que refiere:

"Esto es así, ya que como lo señala la responsable, la señalada tesis XIII/2009, va en el sentido de que en el procedimiento especial sancionador, únicamente cuando se trate de propaganda que denigre o calumnie, se requiere instancia de parte agraviada, como se verá enseguida.

La tesis en comento señala lo siguiente

"PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO ESPECIAL SANCIONADOR. SUJETOS LEGITIMADOS PARA PRESENTAR LA QUEJA O DENUNCIA.— De la interpretación sistemática y funcional de los artículos 361, párrafo 1, 362, párrafo 1 y 368, párrafo 2, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, se concluye que, por regla general, cualquier sujeto puede presentar denuncias para iniciar el procedimiento administrativo especial sancionador y, solamente por excepción, la parte agraviada cuando se trate de la difusión de propaganda que denigre o calumnie. Lo anterior obedece a que el procedimiento mencionado es de orden público, por lo que basta que se hagan del conocimiento de la autoridad administrativa sancionadora hechos que presuntamente infrinjan normas electorales para que dé inicio el procedimiento administrativo especial sancionador."

Ahora bien, la tesis antes señalada, tiene su origen en el diverso Juicio para la Protección de los Derechos Político-Electorales del Ciudadano y Recurso de Revisión SUP-JDC-404/2009 y SUP-RRV-1/2009 acumulados, de ahí que para dilucidar la cuestión alegada, resulta pertinente transcribir la parte conducente de la ejecutoria.

"De la interpretación sistemática y funcional de los artículos 361, párrafo 1, 362, párrafo 1 y 368, párrafo 2 del Código, se advierte que, por regla general, cualquier sujeto puede presentar denuncias para iniciar el procedimiento administrativo sancionador especial y solamente por excepción se requiere instancia de parte agraviada cuando se trate de la difusión de propaganda que denigre o calumnie.

En efecto, el artículo 361, párrafo 1, de la citada legislación, al regular el procedimiento ordinario, establece que el procedimiento para el conocimiento de las faltas y aplicación de sanciones administrativas podrá iniciar a instancia de parte, o de oficio cuando cualquier órgano del Instituto Federal Electoral tenga conocimiento de la comisión de conductas infractoras.

El artículo 362, párrafo 1, del Código, también a propósito del procedimiento ordinario, establece que cualquier persona podrá presentar quejas o denuncias por presuntas violaciones a la normatividad electoral ante los órganos centrales o desconcentrados del Instituto Federal Electoral y que las personas morales lo harán por medio de sus legítimos representantes, en términos de la legislación aplicable y las personas físicas lo harán por propio derecho.

Estos preceptos permiten establecer que el legislador reiteró el modelo inquisitivo que rige en el procedimiento administrativo sancionador, dados los bienes jurídicos protegidos en materia electoral, para lo cual concreto una norma general expresa, consistente en que este tipo de procedimientos no está sujeto a instancia de parte agraviada y por el contrario puede iniciarse de oficio, lo que, como ya se dijo, es coherente con las finalidades de orden público que persigue la aplicación de sanciones a infractores de las normas rectoras del proceso electoral.

Como regla general admite excepciones como la prevista en el artículo 363, párrafo 1, inciso a), del Código que establece que la queja o denuncia será improcedente cuando versen sobre presuntas violaciones a la normatividad interna de un partido político y el denunciante o quejoso no acredite su pertenencia al partido de que se trate o a su interés jurídico.

Respecto del procedimiento administrativo sancionador especial, la excepción de su inicio oficioso está claramente establecido en el artículo 368, párrafo 2, del Código, que únicamente limita la posibilidad de presentar denuncias o quejas a un sujeto determinado, cuando se trate de la difusión de propaganda que denigre o calumnie, caso en el cual constriñe esa facultad a la instancia de parte agraviada, de tal manera que el resto de los casos no incluidos en esa excepción, a contrario sensu, se regulan por las reglas generales ya mencionadas, consistentes en que cualquier persona puede denunciar y que el procedimiento puede iniciarse de oficio o a instancia de parte.

...

De igual forma, atendiendo a lo señalado en el artículo 89 fracción XXII del Código de la materia se determina que sólo podrán iniciar a petición de parte aquellos procedimientos en los cuales debe mediar una denuncia presentada por los partidos políticos o coaliciones y que se refieren a actos violatorios realizados por las autoridades u otros partidos en contra de su propaganda, candidatos o miembros. Lo anterior en virtud de que la citada fracción establece de manera clara que corresponde a este Cuerpo Colegiado investigar por los medios legales pertinentes y de manera especial los hechos que denuncien los partidos políticos por los referidos actos violatorios, previéndose de manera clara que debe mediar la presentación de la denuncia por parte de dichos institutos políticos.

Por último, se establece que las reformas al Reglamento en cita entrarán en vigor al día siguiente de su aprobación por el Consejo General del Instituto Electoral del Estado.

En términos de lo manifestado, este Órgano Superior de Dirección en ejercicio de la atribución conferida por el artículo 89 fracción I del Código Comicial y una vez analizado el documento de mérito estima pertinente aprobarlo en sus términos, al considerar que observa lo ordenado por el Órgano Jurisdiccional en cita. Dicho instrumento corre agregado a este acuerdo como anexo único formando parte integrante del mismo.

4.- Que, conforme a lo prescrito en el artículo 91 fracción XXIX del Código de la materia el Consejo General faculta al Consejero Presidente de este Instituto para que informe en términos del punto resolutivo TERCERO de la resolución identificada con la clave de expediente TEEP-A-008/2010 y su acumulado TEEP-A-009/2010.

Por lo anteriormente expuesto, y en ejercicio de las facultades que confiere el artículo 89 fracción LIII del Código de Instituciones y Procesos Electorales del Estado de Puebla, el Consejo General del Instituto Electoral del Estado emite el siguiente:

ACUERDO

PRIMERO.- El Consejo General del Instituto Electoral del Estado aprueba diversas reformas al Reglamento para la Tramitación de Denuncias del Instituto Electoral del Estado, de acuerdo a lo señalado en el considerando 3 del presente acuerdo.

SEGUNDO.- El Consejo General del Instituto Electoral del Estado faculta al Consejero Presidente de este Instituto para que informe en términos del punto resolutivo TERCERO de la resolución identificada con la clave de expediente TEEP-A-008/2010 y su acumulado TEEP-A-009/2010, atendiendo a lo señalado en el considerando 4 de este instrumento.

TERCERO.- Publíquese el presente acuerdo en el Periódico Oficial del Estado.

Este acuerdo fue aprobado por unanimidad de votos de los integrantes del Consejo General del Instituto Electoral del Estado en sesión especial de fecha primero de abril de dos mil diez.

CONSEJERO PRESIDENTE

SECRETARIO GENERAL

LIC. JORGE SÁNCHEZ MORALES

LIC. NOÉ JULIÁN CORONA CABAÑAS